

PROYECTO DE LEY

REFORMA AL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1: Sustituyese el art. 9 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 9. Materia tributaria. Cuando el acto administrativo impugnado ordenase el pago de una suma de dinero proveniente de impuestos, tasas o contribuciones, el/la juez/a determinará sumariamente y con carácter cautelar, de acuerdo a la verosimilitud del derecho invocado por la parte, si corresponde o no el pago previo del impuesto, tasa o contribución, antes de proseguir el juicio.

Art.2 Sustituyese el art. 10 de la Ley N° 189 el siguiente texto:

Art. 10° Autoridad Administrativa como Parte Actora. Cuando la demanda sea deducida por autoridad administrativa, cualquiera sea la pretensión procesal, rigen al respecto las disposiciones establecidas por el título IX y el capítulo III del título XII, sin perjuicio de la aplicación del resto del articulado en cuanto fuere pertinente. Las demandas contra la autoridad administrativa, que no tuviesen un trámite expresa y específicamente previsto, cualquiera fuese su objeto o causa, tramitarán conforme lo establecido en el Título VIII.

Art. 3: Sustituyese el art. 30 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 30. Sanciones conminatorias. Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe es a favor del titular del derecho afectado por el incumplimiento. Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas, y pueden ser dejadas sin efecto o reajustarse si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

Cuando el incumplimiento de la orden judicial sea imputable a una autoridad administrativa, excepcionalmente el tribunal podrá disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario directamente responsable del máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en el incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad del pago, serán satisfechas por la Administración. Es requisito para hacer valer esta responsabilidad subsidiaria que la autoridad administrativa haya tomado conocimiento de la intimación y de la aplicación de la sanción en su domicilio legal, sin perjuicio de la notificación dirigida al funcionario responsable. Serán dejadas sin efecto cuando se advierta que existe imposibilidad material por parte del funcionario directamente responsable de cumplir con la decisión judicial o cuando exista desproporción notoria entre el resultado de la aplicación de la sanción y la manda cuyo cumplimiento exige.

Art. 4: Sustituyese el art. 31 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 31. Secretarios/as. Deberes. Además de los deberes que se imponen a los secretarios/as en otras disposiciones de este código y en las leyes y reglamentos de organización judicial, sus funciones son:

1.Comunicar a las decisiones judiciales a las partes terceros, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades de los letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones.

2. Extender certificados, testimonios y copias de actas.
3. Disponer vistas y traslados.
4. Sin perjuicio de las facultades conferidas al prosecretario administrativo, firmar las providencias de mero trámite, observando el plazo establecido por el art. 27, inc. 3, a). Durante la etapa de prueba, suscribirá todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad, negligencia o caducidad de medidas probatorias.
5. Dirigir personalmente las audiencias testimoniales, cuando el juez le delege esta tarea. La delegación aquí prevista puede ser efectuada verbalmente.
6. Devolver los escritos presentados fuera de plazo.

Art. 5: Sustituyese el art. 32 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 32. Prosecretarios/as Administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que se imponen a los prosecretarios/as administrativos/as en otras disposiciones de este código y en las leyes y reglamentos de organización judicial, sus funciones son:

- 1) Firmar las providencias simples que disponen:
 - a. Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.
 - b. Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervienen como parte, en cumplimiento de las vistas ordenadas por el Secretario.
 - c. Devolver los escritos presentados sin copias.

Art. 6: Sustituyese el art. 33 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 33°. Recusación. Recurso. Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente. En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. Dentro del plazo de tres días, las partes pueden solicitar al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario/a o prosecretario administrativo/a. Este pedido se resuelve sin sustanciación. La resolución es inapelable.

Art. 8: Sustituyese el art. 119 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 119°. Notificación personal o por cédula. Sólo son notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:

- 1) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.
- 2) La que dispone correr traslado de las excepciones.
- 3) La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.
- 4) Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.
- 5) Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, o la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.
- 6) La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos por tiempo indeterminado.
- 7) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de Secretaría más de tres meses.
- 8) Las que disponen traslado de liquidaciones y las que se aprueben.
- 9) La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.
- 10) La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

- 11) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento.
- 12) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan caducidad de la prueba por negligencia.
- 13) La providencia que deniega el recurso de inaplicabilidad de ley.
- 14) La providencia que hace saber el/la juez/a o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia.
- 15) La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.
- 16) La providencia que hace saber que los autos se encuentran en Secretaría para alegar.
- 17) Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o cuando excepcionalmente el/la juez/a lo disponga por resolución fundada.

Se notifican por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.

Los/las funcionarios/as judiciales quedan notificados/as el día de la recepción del expediente en su despacho. Tienen la carga de devolverlo dentro del tercero día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que haya lugar.

Art. 9: Sustituyese el art. 146.2 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 146. 2. Declaración de inconstitucionalidad de las normas de oficio. Los jueces pueden, a través de sus sentencias, declarar de oficio para el caso, la inconstitucionalidad de las normas, en la medida en que tal declaración guarde relación directa con el objeto del proceso y la misma resulte imprescindible para resolver el conflicto planteado.

Art. 10: Sustituyese el art. 181 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 181. 2. Contracautela. Las medidas precautorias sólo pueden disponerse bajo la responsabilidad de la parte que las solicite, quien debe dar caución por las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar.

El juez gradúa la calidad y monto de la caución, de acuerdo a la verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

Puede ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o personas de acreditada solvencia.

Art. 181. 3. Exención de la contracautela. No se exige caución, si quien obtuvo la medida:

- 1) fuere una autoridad administrativa;
- 2) actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Art. 181. 4. Mejora de la contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiera trabado una medida cautelar puede pedir que se mejore la caución, probando sumariamente que la ordenada resulta insuficiente. El juez resuelve previo traslado a la otra parte. La resolución se notifica por cédula.

Art. 181.5.: Cuando la cautelar fuese decretada en segunda instancia, la contraparte podrá recurrirla en esa misma instancia por revocatoria, recurso que deberá interponerse y fundarse dentro de los tres días de notificada personalmente o por cédula, que deberá resolverse en la Alzada previo traslado por cédula por igual plazo.

Art. 11: Sustituyese el art. 189 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 189.- Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, cuando concurren en forma conjunta los siguientes supuestos:

Si se invoca un derecho verosímil en relación con la pretensión ejercida en el proceso o el hecho, acto o contrato ostenta una ilegalidad manifiesta;

Si su ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar en forma inminente graves daños al/la administrado/a o tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión;

Si la suspensión no resulta en un perjuicio grave e irreparable para el interés público.

La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un daño grave o irreparable al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por 5 días, resuelve el mantenimiento o levantamiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irroque la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso.

Art. 12: Sustituyese el art. 212 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 212°. Procedencia. El recurso de reposición procede únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio.

Art. 13: Sustituyese el art. 220 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 220. Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo.

Se concede libremente el recurso deducido contra la sentencia definitiva dictada en los procesos de conocimiento pleno, regulados por los arts. 269, 287, siguientes y concordantes. En los demás casos se concede en relación.

Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo.

Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo dispone.

Art. 14 Sustituyese el art. 252 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 252. Recurso de inaplicabilidad de la ley. Admisibilidad. El recurso de inaplicabilidad de la ley sólo es admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las Salas de la Cámara durante los 5 (cinco) años anteriores a la fecha del fallo recurrido, siempre que el precedente se hubiera invocado antes de que aquél se pronuncie.

Art. 252.2. Apoderados. La interposición del recurso de inaplicabilidad de la ley no es obligación para los apoderados. Para deducirlo no es necesario poder especial.

Art. 252.3. Prohibiciones. Es inadmisile agregar documentos, ofrecer prueba, alegar hechos nuevos y recusar a los miembros del tribunal.

Art. 252.4. Fundamentación. El recurso se interpone dentro de los diez días de notificada la sentencia, ante la Sala que la pronunció.

Al deducirlo, el recurrente debe señalar la existencia de la contradicción en términos precisos, indicar el escrito en que mencionó el precedente y expresar los fundamentos que, a su entender, demuestran la procedencia del recurso. El incumplimiento de estos requisitos determina su inadmisibilidad. Si esta última es manifiesta, el recurso puede ser rechazado in limine por la Sala que dictó el pronunciamiento recurrido. La declaración de inadmisibilidad del recurso por la Sala se notifica personalmente o por cédula y será recurrible dentro del quinto día ante el Tribunal en pleno; el recurso se interpondrá fundado.

Si la presentación reúne los requisitos formales señalados, se confiere traslado a la parte contraria por el plazo de diez días. Esta providencia se notifica personalmente o por cédula.

Art. 252.5. Declaración sobre la admisibilidad. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el presidente de la Sala ante la cual se interpuso el recurso remite el expediente a la Secretaría General para la designación de la Sala que decidirá sobre la admisibilidad de aquél. La Sala designada determina si concurren los requisitos para la admisibilidad formal del recurso, si está debidamente fundado y si existe la contradicción invocada.

El secretario general actúa como secretario de actuación, y debe llevar un protocolo especial.

Si la Sala designada declarase que el recurso es inadmisibile o insuficiente, devuelve el expediente a la Sala de origen. Si lo juzgara admisible lo concede con efecto suspensivo y remite los autos a la Presidencia de la Cámara.

En ambos casos la resolución es irrecurrible.

Art. 252.6. Redacción del cuestionario. Recibido el expediente, el Presidente de la Cámara dicta la providencia de autos y, una vez firme, determina la cuestión a resolver. Si fueren varias, las formula separadamente. En todos los casos, la redacción debe permitir responder por sí o por no.

Art. 252.7. Cuestiones a decidir. El Presidente remite a cada miembro del tribunal, en forma simultánea, una copia del memorial y su contestación, y un pliego que contendrá la cuestión a decidir. Dentro del plazo de cinco días, cada vocal expresa su conformidad o, en su caso, formula objeciones sobre la redacción del temario.

Art. 252.8. Determinación obligatoria de las cuestiones. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, el Presidente decide si mantiene o modifica el temario, atendiendo a las observaciones y sugerencias que hubiese recibido. Su decisión es obligatoria.

Art. 252.9. Mayoría. Minoría. Fijado definitivamente el temario, el Presidente convoca un acuerdo cuya celebración tiene lugar dentro del plazo de veinte días. En él se determina si existe unanimidad de opiniones o, en caso contrario, cómo se constituyen la mayoría y la minoría.

Art. 252.10. Voto conjunto. Ampliación de fundamentos. La mayoría y la minoría, respectivamente, expresan su opinión mediante un voto conjunto e impersonal y, dentro del plazo de treinta días, su fundamentación.

Art. 252.11. Resolución. La decisión se adopta por el voto de la mayoría de los jueces que integran la Cámara.

Art. 252.12. Doctrina legal. Efectos. La sentencia plenaria establece la doctrina legal aplicable. Cuando deja sin efecto el fallo recurrido, las actuaciones son remitidas a la Sala que resulte sorteada, para dictar nueva sentencia conforme la doctrina obligatoria establecida.

Art. 252.13. Suspensión de pronunciamientos. Declarada la admisibilidad del recurso, conforme lo establecido en el art. 252.6., el Presidente de la Cámara notifica a cada Sala para que suspenda el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. El plazo para dictar sentencia en cada uno de estos expedientes se reanuda cuando se dicta el fallo plenario.

Art. 252.14. Convocatoria. La Cámara puede reunirse en tribunal plenario por iniciativa de cualquiera de sus Salas, con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias.

La convocatoria se admite siempre que la iniciativa obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los jueces de la Cámara.

Art. 252.15. Obligatoriedad. La interpretación de la ley establecida en un fallo plenario es obligatoria para la Cámara y los jueces de primera instancia, sin perjuicio de que cada magistrado deje a salvo su opinión personal.

La doctrina fijada sólo puede modificarse mediante un nuevo plenario.

Art. 15: Sustituyese el art. 260 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 260 – Plazos. Se produce la caducidad de la instancia cuando no se insta su curso:

En primera instancia, dentro de los seis (6) meses.

En segunda o ulterior instancia, en el juicio sumario, ejecutivo, ejecuciones especiales e incidentes, dentro de los tres (3) meses.

En el incidente de caducidad de instancia, dentro del término de un(1) mes.

La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no haya sido notificada la resolución que dispone su traslado.

Art. 16: Sustituyese el art. 272 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 272. Requerimiento de expedientes administrativos. Presentada la demanda en forma, el tribunal podrá disponer el secuestro de los expedientes administrativos directamente relacionados con la acción al organismo de origen. Dichas actuaciones deben ser remitidas dentro de los diez días. Ante pedido fundado de la autoridad administrativa, formulado dentro del plazo indicado precedentemente, el Tribunal podrá disponer su ampliación hasta diez días más, los que se computarán a partir del vencimiento del plazo inicial. Si la autoridad requerida no remitiese los expedientes en el plazo correspondiente, el tribunal dispondrá el secuestro de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan al funcionario negligente. Si la autoridad requerida no remitiese los expedientes en el plazo correspondiente, el tribunal continúa el procedimiento, tomando como base la exposición de los hechos contenidos en la demanda a los efectos previstos en el art. 273, sin perjuicio de la facultad de la autoridad administrativa demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder en su caso”.

Art. 17: Sustituyese el art. 277 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 277. 2. Opción. Si el accionante pretende que la cuestión tramite por las reglas procesales establecidas para las demandas contra las autoridades administrativas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 269 y siguientes de este código, el juez resolverá esta cuestión como primera providencia, teniendo en cuenta, a tal efecto, la naturaleza de la cuestión.

Art. 277. 3. Procedimiento. Presentada la demanda con sujeción a lo dispuesto en el artículo 269, se da traslado por veinte (20) días. Para la contestación rige lo dispuesto en el artículo 279 de este código. Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, debe acompañarse la prueba instrumental, en los términos del artículo 270, y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse.

La reconvención es admisible. Deducida, se da traslado por diez (10) días.

Las excepciones previas se rigen por las mismas normas de los artículos 282 a 286, pero se oponen conjuntamente con la contestación a la demanda.

Dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvencción en su caso, el actor o reconviniendo puede ampliar su prueba con respecto a hechos invocados por el demandado o reconvenido, que no hubiesen sido aducidos en la demanda o reconvencción, siempre que tenga relación con las cuestiones a que se refiere el proceso y directa incidencia en la decisión del litigio. Con respecto a la prueba documental, debe observarse lo dispuesto por el artículo 281 de este código.

Contestada la demanda o la reconvencción, vencido el plazo para hacerlo o desestimadas en su caso las excepciones previas, no habiendo hecho controvertidos el juez declara la cuestión de puro derecho y una vez firme dicha providencia, dicta sentencia dentro del plazo de diez (10) días.

Si hubiere hechos controvertidos, el Tribunal, en una misma providencia, fija la audiencia de prueba y, en su caso, designa perito en los términos del artículo 365 y ordena los oficios que hayan sido solicitados por las partes. La providencia que fija la audiencia se notificará por secretaría y por cédula.

Si fuese pertinente la prueba pericial, el juez designa perito único de oficio, quien debe presentar su dictamen con anticipación de cinco (5) días al acto de la audiencia de prueba. El perito puede ser recusado dentro de tercer día de su nombramiento. Deducida la recusación se procede en la forma establecida en el artículo 374.

Los testigos no pueden exceder de dos (2) por cada hecho a probar. Si se hubiese propuesto un mayor número, el juez cita a los dos (2) primeros y luego de examinados, de oficio, o a pedido de parte, puede disponer la recepción de otros testimonios si fuesen estrictamente necesarios.

Para la citación y comparecencia del testigo regirá lo dispuesto en los artículos 339 y 340.

El juez declara clausurado el período correspondiente, e invita a que las partes formulen su alegato en la misma audiencia o dentro de los tres (3) días de su celebración. El plazo para alegar es común. Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal dicta sentencia dentro del plazo de cinco (5) días.

Art. 277.4. Recursos y normas supletorias. Únicamente son apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda; la que declara la cuestión de puro derecho; la que decide las excepciones previas; las providencias cautelares; las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva.

Art. 18: Sustituyese el art. 316 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Art. 316: Documento en poder de una de las partes. Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intima su presentación en el plazo que el/la juez/a determine.

Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituye una presunción en su contra. Cuando se trate de actuaciones administrativas, se requerirán por oficio, para ser agregadas en un plazo no menor a los treinta (30) días.

Art. 19: Sustitúyense los arts. 390 y 391 de la Ley N° 189 por los siguientes textos:

Art. 390. Alegatos. Si se hubiere producido prueba, y no se hallare ninguna pendiente o ha vencido el plazo fijado para su producción, el prosecretario administrativo pondrá los autos en Secretaría para alegar. Esta providencia se notifica personalmente o por cédula y, una vez firme, se entrega el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de seis (6) días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que aleguen sobre el mérito de la prueba.

Se considera como una sola parte a quienes actúen con representación común.

Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere pierde el derecho de alegar. En este último supuesto el derecho a alegar correrá para la otra parte a partir del día de nota que corresponda a la fecha de devolución fuera de término que se haya producido de las actuaciones judiciales.

El plazo para alegar comienza para cada parte desde el retiro de las actuaciones.

Art. 391. Llamado de autos para sentencia. Sustanciado el pleito en el caso del art. 389, o transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el secretario agrega los alegatos y, acto continuo, el juez llama los autos para sentencia.

Art. 391.2. Efectos del llamado. Desde el llamado de autos queda cerrada toda discusión, y no pueden presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez disponga en los términos del art. 29, inc. 2. Estas deben ser ordenadas en un solo acto.

Art. 391.3. Notificación de la sentencia. La sentencia es notificada de oficio, dentro del tercer día de su dictado, transcribiéndose en la cédula la parte dispositiva. Al litigante que lo solicite se le entrega una copia simple de la sentencia, suscripta por el secretario o el prosecretario administrativo.

Art. 20. Sustituyese el art. 451 de la Ley N° 189 por el siguiente texto:

Artículo 451. Intimación de pago. Excepciones. En la ejecución fiscal, si el/la ejecutado/a no abonara en el acto de intimársele el pago, queda desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles las siguientes:

1. Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes;
2. Espera documentada;
3. Litis pendencia, en otro tribunal competente;
4. Falta de legitimación pasiva en el/la ejecutado/a para obrar;
5. Pago, total o parcial, o cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, documentado mediante constancia expedida por la autoridad administrativa o entidad pública o privada autorizada a percibir el tributo en su nombre, o cuando se haya expedido, por autoridad competente, una certificación de inexistencia de deuda que comprenda el período reclamado;
6. Falsedad o inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de deuda;
7. Prescripción;
8. Cosa Juzgada.

El plazo para oponer excepciones será de cinco (5) días.

Art. 21. Agréganse los siguientes Capítulos

CAPITULO III DE LAS EJECUCIONES

Art. 463. Procedencia.- La administración procederá ejecutivamente siempre que en virtud de UN (1) título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables. Si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél, o de la diligencia prevista en el artículo 525, inciso 4, resultare haberse cumplido la condición o prestación. Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en moneda nacional, según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las partes hubiesen convenido, sin

perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago. Cuando la Ciudad sea demandada, rige lo establecido en el art. 10.1 para todos los tipos de juicios ejecutivos.

Art. 464. Opción por proceso de conocimiento.- Si, en los casos en que por este Código, corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del demandado, el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, resolverá cuál es la clase de proceso aplicable.

Art. 465. Deuda parcialmente líquida.- Si del título ejecutivo resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera.

Art. 466. Títulos ejecutivos.- Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

- 1) El instrumento público presentado en forma.
- 2) El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo.
- 3) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución.
- 4) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 525.
- 5) La letra de cambio, factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial.
- 6) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles.
- 7) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

Art. 467. Crédito por expensas comunes.- Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si éste no los hubiere previsto deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces.

Art. 468. Preparación de la vía ejecutiva.- Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente:

- 1 Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución.
- 2 Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiere probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de éste se probare el carácter de inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto de la deuda.
- 3 Que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El juez dará traslado y resolverá sin más trámite ni recurso alguno.
- 4 Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional.

Art. 469. Citación del deudor.- La citación al demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los artículos 339 y 340, bajo apercibimiento de que si no compareciese o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos. El citado deberá comparecer personalmente y formular la manifestación ante el juez. Dicha manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá formularse por medio de gestor. Si el citado no compareciere, o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiere sido reconocido por el deudor personalmente, o hubiese confesado los hechos, en los demás casos. El desconocimiento de la firma por alguno de los coejecutados no impide que se cumpla con lo dispuesto por los artículos 531 y 542, respecto de los deudores que la hayan reconocido, o a quienes se los haya tenido por reconocida.

Art. 470. Efectos del reconocimiento de la firma.- Reconocida la firma del instrumento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido.

Art. 471. Desconocimiento de la Firma.- Si el documento no fuere reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de UN (1) perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá según lo establece el artículo 531 y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate. La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en efecto diferido.

Art. 472. Caducidad de la medidas preparatorias.- Se producirá la caducidad de las medidas preparatorias del juicio ejecutivo, sin necesidad de declaración judicial, si no se dedujere la demanda dentro de los QUINCE (15) días de su realización. Si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.

Art. 473. Firma por autorización o a ruego.- Si el instrumento privado hubiese sido firmado por autorización o a ruego del obligado, quedará preparada la vía ejecutiva si, citado éste, declarase que otorgó la autorización o que es cierta la deuda que el documento expresa. Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al autorizado para que reconozca la firma.

Art. 474. Intimación de pago y procedimiento para el embargo.- El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los artículos 523 y 524, o en otra disposición legal, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librárá mandamiento de embargo, observándose el siguiente procedimiento:

1 Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagare en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida por el artículo 528, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales.

2 El embargo se practicará aún cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los TRES (3) días siguientes al

de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos que se publicarán por UNA (1) sola vez.

3 El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones. Aunque no se hubiese trabado embargo, la ejecución continuará, pudiendo solicitar el ejecutante la medida cautelar que autoriza el artículo 534.

Art. 475. Denegación de la ejecución.- Será apelable la resolución que denegare la ejecución.

Art. 476. Bienes en poder de un tercero.- Si los bienes embargados se encontraren en poder de UN (1) tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula. En el caso del artículo 736 del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por el trámite de los incidentes o del juicio sumario, según correspondiere atendiendo a las circunstancias del caso.

Art. 477. Inhibición General.- Si no se conocieren bienes del deudor o si los embargados resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra el ejecutado inhibición general de vender o gravar sus bienes. La medida quedará sin efecto si el deudor presentare bienes a embargo o diere caución bastante.

Art. 478. Orden de la traba. Perjuicios.- El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. Serán aplicables, además, las normas establecidas en el capítulo relativo a las medidas cautelares en cuanto fueren pertinentes. Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifestamente para cubrir el crédito reclamado.

Art. 479. Depositario.- El oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de UN (1) depositario provisional que podrá ser el deudor si resultare conveniente, salvo que aquellos se encontraren en poder de UN (1) tercero y éste requiriere nombramiento a su favor.

Art. 480. Deber de informar.- Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el depositario deberá poner el hecho oportunamente en conocimiento del juez, si no lo hubiese expresado ante el oficial de justicia, lo que se hará saber a las partes a los fines del artículo 205.

Art. 481. Embargo de inmuebles o muebles registrables.- Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos serán librados dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de la providencia que ordenare el embargo.

Art. 482. Costas.- Practicada la intimación, las costas del juicio serán a cargo del deudor moroso, aunque pagare en el acto de realizarse aquélla.

Art. 483. Ampliación anterior a la sentencia.- Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento retrotraiga, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago.

Art. 484. Ampliación posterior a la sentencia.- Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro de quinto día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante, o no se comprobare sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes. La facultad que otorga este artículo no podrá ser ejercida una vez terminada la tramitación del juicio.

Art. 485. Intimación de pago. Oposición de excepciones.- La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados. Las excepciones se propondrán, dentro de CINCO (5) días, en UN (1) solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba. Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 330 y 356, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen. La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 41. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de remate.

Art. 486. Trámites irrenunciables.- Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia.

Art. 487. Excepciones.- Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:

1 Incompetencia.

2 Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.

3 Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.

4 Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento. Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda.

5 Prescripción.

6 Pago documentado, total o parcial.

7 Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.

8 Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado.

9 Cosa juzgada.

Art. 488. Nulidad de la ejecución.- El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el artículo 542, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en:

1 No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad, el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones.

2 Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario, o el cumplimiento de la condición o de la prestación. Es inadmisibles el pedido de nulidad si el ejecutado no mencionare las excepciones que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su petición.

Art. 489. Subsistencia del Embargo.- Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante QUINCE (15) días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución.

Art. 490. Trámite.- El juez desestimarán sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia de remate. Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por CINCO (5) días quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse. No se dará declaración especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones.

Art. 491. Excepciones de puro derecho. Falta de prueba.- Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente, o no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de DIEZ (10) días de contestado el traslado; si no se lo hubiere contestado, el plazo se contará desde que se hubiere requerido la resolución.

Art. 492. Prueba.- Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. El juez, por resolución fundada, desestimarán la prueba manifiestamente inadmisibles, meramente dilatoria o carente de utilidad. Se aplicarán las normas que rigen el juicio sumario supletoriamente en lo pertinente.

Art. 493. Sentencia.- Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente; el juez pronunciará sentencia dentro de los DIEZ (10) días.

Art. 494. Sentencia de remate.- La sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo. En el primer caso, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el CINCO POR CIENTO (5 %) y el TREINTA

POR CIENTO (30 %) del importe de la deuda, según la incidencia de su conducta procesal sobre la demora del procedimiento.

Art. 495. Notificación al defensor oficial.- Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificará al defensor oficial.

Art. 496. Juicio Ordinario Posterior.- Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución. La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento. El juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último.

Art. 497. Apelación.- La sentencia de remate será apelable:

- 1 Cuando se tratare del caso previsto en el artículo 547, párrafo primero.
- 2 Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho.
- 3 Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.
- 4 Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. Serán apelables las regulaciones de honorarios que contuviere la sentencia de remate o fueren su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea.

Art. 498. Efecto. Fianza.- Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuese revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo. El juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestase dentro de los CINCO (5) días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la cámara. Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera instancia, testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la ejecución.

Art. 499. Fianza requerida por el ejecutado.- La fianza sólo se hará extensiva al resultado del juicio ordinario, cuando así lo requiriere el ejecutado en los casos en que, conforme al artículo 553, tuviere la facultad de promover el juicio ordinario posterior. Quedará cancelada:

- 1 Si el ejecutado no promoviere el juicio dentro de los QUINCE (15) días de haber sido otorgada.
- 2 Si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo, la sentencia fuere confirmada.

Art. 500. Carácter y plazo de las apelaciones.- Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la providencia que denegare la ejecución.

Art. 501. Costas.- Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia.

Art. 501 bis: Límites y modalidades de la ejecución.- Durante el curso del proceso de ejecución, el juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias así lo aconsejaren, fijar UNA (1) audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios. A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente, y se celebrará con la que concurra. No podrá señalarse UNA (1) nueva con el mismo objeto, ni tampoco podrá el ejecutado promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron invocadas en dicha audiencia.

Art. 502. Cumplimiento de la Sentencia.- Si la subasta se dispone a requerimiento de propietario o de condómino y no en cumplimiento de UNA (1) sentencia de condena, la operación se registrará por las normas del derecho sustancial; en este caso, las que se establecen en este Código sólo serán aplicables en lo que fueren conciliables con aquéllas.

Art. 503. Recursos.- Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones que se dictaren durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, salvo las que se refieran a cuestiones que:

1 No pueden constituir objeto del juicio ordinario posterior.

2 Debiendo ser objeto del juicio ordinario posterior, con arreglo al artículo 553, no obstante, han sido debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia por haber asentido el ejecutante.

3 Se relacionen con el reconocimiento del carácter de parte.

4 En los casos de los artículos 554 inciso 4 y 591, primero y segundo párrafos.

Art. 504. Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago inmediato.- Es requisito del trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, la traba de embargo. Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 555, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo pertinente, las reglas de los artículos 503 y 504. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.

Art. 505. Adjudicación de títulos o acciones.- Si se hubiese embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de valores, el ejecutante podrá pedir que se le den en pago al precio que tuvieran a la fecha de la resolución que así lo dispone; si no se cotizaren, se observará lo establecido por el artículo 573.

Art. 506. Martillero. Designación. Carácter de su actuación. Las cámaras nacionales de apelaciones abrirán, cada año, UN (1) registro en el que podrán inscribirse los martilleros con más de DOS (2) años de antigüedad en la matrícula y que reúnan los demás requisitos de idoneidad que reglamente el tribunal. De dicha lista se sorteará el o los profesionales a designar, quienes deberán aceptar el cargo dentro de tercero día de notificados. El martillero será nombrado de oficio, en la forma establecida en el párrafo precedente, salvo si existiere acuerdo de las partes para proponerlo y el propuesto reuniera los requisitos a que se refiere el párrafo primero. No podrá ser recusado; sin embargo, cuando circunstancias graves lo aconsejaren, el juez, dentro de quinto día de hecho el nombramiento, podrá dejarlo sin efecto. Deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el juez; si no cumpliera con este deber podrá ser removido; en su caso, se le dará por perdido total o parcialmente el derecho a comisión o se aplicará en lo pertinente la sanción que establece el tercer párrafo del artículo 565. No podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa del juez. El martillero no es

parte en los trámites del cumplimiento de la sentencia de remate; sólo podrá tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos establecidos en este Código o en otra ley.

Art. 507. Depósito de los importes percibidos por el martillero. Rendición DE CUENTAS.- El martillero deberá depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al juzgado, dentro de los TRES (3) días de realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, carecerá de derecho a cobrar comisión.

Art. 508. Comisión. Anticipo de Fondos.- El martillero percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por la ley o, en su caso, la costumbre. Si el remate se suspendiere o fracasare sin culpa del martillero, el monto de la comisión será fijado por el juez, de acuerdo con la importancia del trabajo realizado; si se anulare, también sin su culpa, tendrá derecho a la comisión que correspondiere. Si el mismo martillero vendiere el bien en un remate posterior, su retribución será determinada atendiendo al efectivo trabajo que le hubiere demandado esa tarea. Si el remate se anulare por culpa del martillero, éste deberá reintegrar el importe de la comisión que percibió, dentro de tercero día de notificado por cédula de la resolución que decreta la nulidad. Cuando el martillero lo solicitare y el juez lo considere procedente, las partes deben adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.

Art. 509. Edictos.- El remate se anunciará por edictos, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en otro diario, en la forma indicada en los artículos 145, 146 y 147. Si se tratare de bienes de escaso valor, sólo se publicarán en el Boletín Oficial, por UN (1) día y podrá prescindirse de la Publicación si el costo de la misma no guardare relación con el valor de los bienes. Si se tratare de inmuebles, podrá, asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén situados. En los edictos se indicará el juzgado y secretaría donde tramita el proceso, el número del expediente y el nombre de las partes si éstas no se opusieren; el lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no tratándose de bienes de escaso valor, se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podrán ser revisados por los interesados; se mencionará, asimismo, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades especiales del mismo. Si la subasta fuere de inmuebles, deberá indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y en el acto del remate deberá determinarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible. En todos los casos, la última publicación deberá realizarse cuando menos CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del remate. No podrán denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos CINCO (5) días contados desde la última publicación.

Art. 510. Propaganda. Inclusión indebida de otros bienes.- La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo si el ejecutado hubiese dado conformidad, o si su costo no excediere del DOS POR CIENTO (2 %) de la base. No se podrá mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder el martillero su comisión, bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada judicialmente. Si la propaganda adicional se realizare a través de diarios, será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.

Art. 511. Preferencia para el remate. Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, salvo disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su

trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos. La preferencia que se acordare para la realización del remate importa reconocer al acreedor que promovió el juicio donde se ordena, la facultad de proponer martillero, si en el acto constitutivo de la obligación se le hubiere otorgado esa prerrogativa.

Art. 512. Subasta progresiva.- Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el juez a pedido del ejecutado, podrá ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.

Art. 513. Posturas bajo sobre.- Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio el juez podrá disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires o las cámaras podrán establecer las reglas uniformes de aplicación de la expresada modalidad del remate. Si se tratare de subasta de muebles que se realice por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires u otras instituciones oficiales que admitan posturas bajo sobre, se aplicará esa modalidad en los términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Art. 514. Compra en comisión.- El comprador deberá indicar, dentro de tercero día de realizada la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. En su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo. El comitente constituirá domicilio en esa presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41, en lo pertinente.

Art. 515. Regularidad del acto.- Si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del juez para disponerlo de oficio, el ejecutante, el ejecutado o el martillero podrán solicitar al juzgado la adopción de las medidas necesarias para proveer a la regularidad del remate y al mantenimiento del orden que asegure la libre oferta de los interesados.

Art. 516. Subasta de muebles o semovientes.- Si el embargo hubiere recaído en bienes muebles o semovientes, se observarán las siguientes reglas:

1 Se ordenará su venta en remate, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se establezca, por UN (1) martillero público que se designará observando lo establecido en el artículo 563.

2 En la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el juzgado, secretaría y la carátula del expediente.

3 Se podrá ordenar el secuestro de las cosas, que serán entregadas al martillero para su exhibición y venta; al recibirlas éste, las individualizará con indicación de su estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

4 Si se tratare de muebles registrables, se requerirá a los registros que correspondiere UN (1) informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

5 La providencia que decreta la venta será comunicada a los jueces embargantes; se notificará por cédula a los acreedores prendarios, quienes podrán formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro de tercero día de notificados.

Art. 517. Articulaciones infundadas. Entrega de los bienes.- Al adjudicatario que planteara cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio, se le impondrá la multa que prevé el artículo 581. Pagado totalmente el

precio, el martillero o la parte que, en su caso, correspondiere, entregará al comprador los bienes que éste hubiese adquirido, siempre que el juzgado no dispusiere otra cosa.

Art. 518. Embargos decretados por otros juzgados. Acreedores Hipotecarios.- Decretada la subasta se comunicará a los jueces embargantes e inhibientes. Se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro de tercero día presenten sus títulos. Los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.

Art. 519. Recaudos.- Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes:

1 Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones.

2 Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de UN (1) bien sujeto al régimen de propiedad horizontal.

3 Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del registro de propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia de SESENTA (60) días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados. Asimismo, intimará al deudor para que dentro de tercero día presente el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realizará la subasta mientras no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio. Podrá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo aconsejaren.

Art. 520. Designación del Martillero. Lugar del Remate.- Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordenará la subasta, designando martillero en los términos del artículo 563 y se determinará la base. Oportunamente se fijará el lugar donde aquélla debe realizarse que será donde tramita la ejecución, o el de ubicación del inmueble, según lo resolviere el juez de acuerdo con lo que resultare más conveniente; se establecerá también el día y la hora, que no podrán ser alterados salvo autorización del juez o acuerdo de partes expresado por escrito. Se especificará la propaganda adicional autorizada, en los términos del artículo 567.

Art. 521. Base Tasación.- Si no existiere acuerdo de partes, se fijará como base los DOS TERCIOS (2/3) de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble. A falta de valuación, el juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la tasación; la base equivaldrá a las DOS TERCERAS (2/3) partes de dicha tasación. Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se aplicarán las reglas de los artículos 469 y 470. De la tasación se dará traslado a las partes, quienes dentro de CINCO (5) días comunes expresarán su conformidad o disconformidad. Las objeciones deberán ser fundadas. El juez tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos.

Art. 522. Domicilio del Comprador.-El martillero requerirá al adjudicatario la constitución de domicilio en el lugar que corresponda al asiento del juzgado. Si el comprador no lo constituyese en ese acto y no lo denunciare oportunamente, se aplicará la norma del artículo 41, en lo pertinente.

Art. 523. Comprador. Pago del precio. Suspensión del plazo.- Dentro de los CINCO (5) días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponda al contado, en el banco de depósitos judiciales; si no lo hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se ordenará nueva subasta en los términos del artículo 584. La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta del adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de los

fondos. El ejecutante y el ejecutado tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.

Art. 524. Articulaciones infundadas del Comprador.- Al adjudicatario que plantee cuestiones manifiestamente improcedentes que demoren el pago del saldo del precio, se le impondrá una multa que podrá ser del CINCO POR CIENTO (5 %) al DIEZ POR CIENTO (10 %) del precio obtenido en el remate.

Art. 525. Pedido de Indisponibilidad de Fondos.- El comprador que hubiere realizado el depósito del importe del precio podrá requerir su indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se inscriba el bien a su nombre si prescindiere de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le fuera imputable. La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.

Art. 526. Sobreseimiento del Juicio.- El ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente correspondiere; asimismo, una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, sellado del boleto y el equivalente a una vez y media del monto de la seña. Los importes deberán ser satisfechos aunque el martillero hubiere descontado los gastos del remate de la cantidad correspondiente a seña. La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil. La simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento; tampoco podrá supeditarse el pago a la exigencia de una liquidación previa. El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 580, o antes. Por saldo de precio se entiende el que debe abonarse al contado. La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado o, en su caso, sus herederos. Si el adquirente fuere el acreedor autorizado a compensar, el ejecutado podrá requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado el precio de venta con el crédito del adquirente. En las cuestiones que se plantearan acerca de la suficiencia del pago realizado por el ejecutado, el comprador sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponderle de conformidad con lo establecido en el párrafo primero.

Art. 527. Nueva subasta por incumplimiento del Comprador.- Cuando por culpa del postor cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del remate la venta no se formalizare, se ordenará nuevo remate. Dicho postor será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo. El cobro del importe que resultare, previa liquidación, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiere entregado.

Art. 528. Falta de Postores.- Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro, reduciendo la base en un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

Art. 529. Perfeccionamiento de la Venta.- La venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere, si se hubieren otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador.

Art. 530. Escrituración.- La escritura de protocolización de las actuaciones será extendida por escribano sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado. El adquirente que solicita la escrituración toma a su la realización de las diligencias tendientes a ella, pero no está obligado a soportar los gastos que corresponden a la otra parte.

Art. 531. Levantamiento de Medidas Precautorias.- Los embargos e inhibiciones se levantarán al solo efecto de escriturar, con citación de los jueces que los decretaron. Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantarán definitivamente, si fuere procedente, con la presentación del testimonio para la inscripción en el registro de la propiedad. Los embargos quedarán transferidos al importe del precio.

Art. 532. Desocupación de Inmuebles.- No procederá el desahucio de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición. Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la ocupación apareciere manifiesta, o no requiriere la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del juez, ser sometidas a otra clase de proceso.

Art. 533. Preferencias. -Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial. El defensor de ausentes no podrá cobrar honorarios al ejecutado por su intervención.

Art. 534. Liquidación. Pago. Fianza. - Dentro de los CINCO (5) días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del remate, en su caso, el ejecutante presentará la liquidación del capital, intereses y costas; de ella se dará traslado al ejecutado. Si el ejecutante no presentare oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado a aquél. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá. La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho. Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso ordinario dentro del plazo de QUINCE (15) días desde que aquélla se constituyó. En este caso se impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del importe de la fianza, y que será a favor del ejecutante.

Art. 535. Nulidad de la subasta a pedido de parte. -La nulidad del remate, a pedido de parte, sólo podrá plantearse hasta dentro de quinto día de realizado. El pedido será desestimado "in límine" si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución será apelable; si la cámara confirmare, se impondrá al peticionario una multa que podrá ser del CINCO (5) al DIEZ (10) POR CIENTO (%) del precio obtenido en el remate. Si el pedido de nulidad fuere admisible, se conferirá traslado por CINCO (5) días a las partes, al martillero y al adjudicatario; dicho traslado se notificará personalmente o por cédula.

Art. 536. Nulidad de Oficio. - El juez deberá decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la

actividad jurisdiccional; no podrá hacerlo si hubiere decretado medidas que importen considerar válido el remate.

Art. 537. Temeridad. Si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el juez le impondrá una multa en los términos del artículo 551, sobre la base del importe de la liquidación aprobada.

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN PRENDARIA

Art. 538. Prenda con Registro.- En la ejecución de prenda con registro sólo procederán las excepciones enumeradas en los incisos 1, 2, 3, 4, 6 y 9 del artículo 487 y en el artículo 488 y las sustanciales autorizadas por la ley de la materia.

Art. 539: Prenda Civil. - En la ejecución de la prenda civil sólo serán oponibles las excepciones que se mencionan en el artículo 540, primer párrafo. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.

CAPITULO V EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Art. 540. Excepciones Admisibles. - Además de las excepciones procesales autorizadas por los incisos 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 487 y en el artículo 488, el deudor podrá oponer, únicamente, las de prescripción, pago total o parcial, quita, espera y remisión. Las CUATRO (4) últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales, o testimoniadas, al oponerlas. Dentro del plazo para oponer excepciones podrá invocarse también la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determina el Código Civil.

Art. 541. Informe sobre condiciones del inmueble hipotecario. - Dictada la sentencia de trance y remate se procederá de la siguiente forma:

1. El juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el acreedor. Si de esa diligencia resulta que el inmueble se encuentra ocupado, en el mismo acto se intimará a su desocupación en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública. No verificada en el plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al lanzamiento y se entregará la tenencia al acreedor, hasta la aprobación del remate, con intervención del notario al que se refiere el párrafo anterior. A esos fines, el escribano actuante puede requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio y violentar cerraduras y poner en depósito oneroso los bienes que se encuentren en el inmueble, a costa del deudor.
2. El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la Propiedad un informe sobre el estado y gravámenes que afectaren el inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.
3. Asimismo, el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan en concepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que pesen sobre el inmueble, bajo apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre de deudas. Los reclamos que se dedujeran por aplicación de lo dispuesto en este inciso no afectarán el trámite de remate del bien gravado.
4. La venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio en el plazo que se haya estipulado y realizada la tradición a favor a favor del comprador. El pago se podrá

realizar directamente al acreedor, quien deberá depositar el remanente dentro del quinto día de verificado el cobro. Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble subastado, podrá transmitirla directamente al comprador; caso contrario y no habiendo mediado desposesión como lo prevé el inciso 1 deberá ser entregado con intervención del juez. La protocolización de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado por el comprador, sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.

5. El deudor ni el tercero, poseedor del inmueble hipotecado, pueden interponer incidente ni recurso alguno, salvo las defensas del artículo 64 en la oportunidad del artículo 54, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio sumarísimo posterior, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. Si existiera peligro de desprotección de alguno de los interesados, se notificará al defensor oficial para que asuma el control del proceso de ejecución de la garantía.

6. Una vez realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor podrá impugnar por la vía judicial:

a) La liquidación practicada por el acreedor, y

b) El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo por parte del ejecutante. En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas de que se hiciera pasible.

7. En todos los casos previstos en el presente artículo, no procederá la compra en comisión ni la indisponibilidad de los fondos de la subasta. No obstante el juez podrá pedir caución suficiente al acreedor.

Art. 542. Tercer poseedor. - Si del informe o de la denuncia a que se refiere el artículo anterior, resultare que el deudor transfirió el inmueble hipotecado, dictada la sentencia de remate contra aquél, se intimará al tercer poseedor para que dentro del plazo de CINCO (5) días pague la deuda o haga abandono del inmueble, bajo apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra él. En este último supuesto, se observarán las reglas establecidas en los artículos 3165 y siguientes del Código Civil.

Art. 20: Cámbiase de denominación el Capítulo III del Título XII de la Ley N° 189, denominándosele CAPÍTULO VI.

CAPÍTULO VI

DESOCUPACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO

Art. 21: Sustituyese el art. 463 de la Ley N° 189 por el siguiente:

Art. 543. Acción de desocupación. Procedencia. En los casos de ocupación de bienes del dominio privado del Estado, cualquiera sea su causa o motivo, si se ha cumplido el plazo previsto o, en su caso, se ha declarado la revocación o rescisión del acto por el cual se hubiera otorgado, la autoridad administrativa intima a los ocupantes a desalojar el inmueble. El bien debe ser restituido dentro del plazo de diez días corridos.

Si la intimación no fuese cumplida, la autoridad administrativa debe requerir judicialmente el desalojo. En tal supuesto, al interponer la demanda la parte actora debe acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos en el párrafo anterior.

Es sujeto pasivo de la acción todo ocupante cuyo deber de restituir sea exigible.

Art. 543 Bis. Acción contra intrusos. Cuando la acción se dirige contra intrusos, después de trabada la litis la parte actora puede solicitar la entrega inmediata del inmueble en cualquier estado del juicio. Si a tenor de las constancias del expediente y, en su caso, de las actuaciones administrativas, el derecho invocado es verosímil, el juez hace lugar a este pedido.

Art. 543 Ter. Denuncia de ocupantes. En la demanda y en la contestación, las partes deben señalar la existencia de ocupantes, su número e identidad. Si la parte actora ignora estos extremos, puede remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación de la demanda, su contestación, o ambas.

Art. 543 Quater. Traslado. Luego de comprobar que se encuentran reunidos los requisitos señalados en los artículos 463 y 465, el juez da traslado a los demandados por el plazo de diez (10) días.

Art. 543.5. Localización del inmueble. 1. Si faltase la chapa indicadora del número del inmueble a desalojar, o se suscitare cualquier inconveniente para individualizarlo, la parte actora puede solicitar que el notificador sea acompañado por el funcionario que designe. En este supuesto, la notificación se practica en el inmueble que indique el funcionario designado.

Al practicar la diligencia, el notificador dejará constancia de la indicación efectuada y consigna todos los datos que considera útiles para individualizar el inmueble. La parte actora es responsable de la exactitud de la indicación efectuada por el funcionario.

2. Si la notificación debe cumplirse en una casa con distintas unidades o en un edificio de departamentos y en la cédula no se ha especificado la unidad o el departamento, o se la designa por el número y en la casa o edificio estuviera designada en letras, o viceversa, el notificador requiere al encargado y vecinos si el demandado vive en el edificio y, si lo halla, lo notifica. En caso contrario devuelve la cédula informando el resultado de la diligencia.

Art. 543.6. Deberes y facultades del notificador. El notificador debe comunicar la existencia del juicio a cada uno de los ocupantes presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados en la demanda, previniéndoles que la sentencia producirá efectos contra todos ellos y que, dentro del plazo para contestar la demanda, pueden ejercer el derecho de defensa.

El notificador identifica a los presentes e informa al juez sobre el carácter que invoquen y, en su caso, la existencia de otros ocupantes cuya presunta existencia surja de la diligencia. Aunque existiesen ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenden los trámites y son alcanzados por los efectos de la sentencia.

Para cumplir la diligencia, el notificador puede requerir el auxilio de la fuerza pública y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fueren necesarios.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituye falta grave del notificador.

Art. 543.7. Trámite. La parte demandada no puede reconvenir ni oponer excepciones de pronunciamiento especial y previo. Sólo se admite la prueba documental y pericial. No procede la denuncia de hechos nuevos ni la presentación de alegatos. Son apelables, únicamente, el lanzamiento ordenado en los términos del art. 464 y la sentencia definitiva.

Cuando el juez hace lugar a la pretensión, ordena el lanzamiento de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública. Esta medida se cumple dentro del plazo de diez (10) días, computados desde que la sentencia queda firme.

Art. 543. 8. Alcance de la sentencia. La condena se hace efectiva contra todas las personas que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionadas en la demanda o en la diligencia de notificación, o no se hubiesen presentado en el juicio.

Art. 22: Sustituyese la numeración de los arts. 464 y 465, denominándose art. 544 y art. 545.

Art. 23: Sustituyese el art. 466 de la Ley N° 189 por el siguiente:

Art. 546. Procedimiento. Cuando se debaten cuestiones vinculadas a la tutela sindical implementada por la Ley N° 23.551 o norma que la reemplace en lo futuro, el/la juez/za, por resolución fundada, deberá adaptar el procedimiento a sus disposiciones”.

Art. 547. Reglas particulares. En el supuesto del artículo anterior se aplican las siguientes reglas particulares:

No se admiten excepciones previas ni reconvencción.

Todos los plazos son de cinco (5) días, con excepción del de contestación de demanda, que es de diez (10) días.

El plazo de prueba no excede de veinte (20) días. La audiencia preliminar es fijada dentro del plazo de diez (10) días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

No procede la presentación de alegatos.

La sentencia se dicta dentro de los diez (10) días de cumplida la prueba.

Solo son apelables la sentencia definitiva y las providencias que admiten o deniegan medidas precautorias. La apelación se concede en relación.

Art. 24: Agrégase el siguiente capítulo a la Ley N° 189

CAPÍTULO VII. RECURSOS DIRECTOS ANTE LA CÁMARA

Art. 548.- Ámbito de aplicación. Los recursos directos ante la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sustancian, a falta de disposición específica, de acuerdo al procedimiento previsto en este capítulo.

Art. 549.- Plazo de interposición. El recurso debe interponerse, debidamente fundado, ante el tribunal dentro de los 30 días de notificada la decisión que agota la instancia administrativa. El recurrente tiene la carga de ofrecer, en esta oportunidad, la prueba de la que intente valerse.

Art. 550.- Habilitación de la instancia. Presentado el recurso en forma, el tribunal debe requerir, en caso de que resulte pertinente, los expedientes administrativos directamente relacionados con el recurso al organismo de origen, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 272, 273, 274 y 275 de este Código.

Art. 551.- Traslado. Declarada habilitada la instancia, el tribunal corre traslado a la autoridad administrativa por el plazo de 30 (treinta) días para que comparezca y conteste, según lo dispuesto en los artículos 278, 279 y 280, salvo en lo referido a la reconvencción. Al contestar el traslado la recurrida tiene la carga de ofrecer la prueba.

Art. 552.- Excepciones previas. Dentro de los primeros 5 (cinco) días del plazo para contestar el traslado del recurso, la recurrida puede oponer las excepciones de previo y especial pronunciamiento previstas en el artículo 282, resultando aplicable lo dispuesto en los artículos 283 y 284.

Del escrito en que se interpongan excepciones, se corre traslado al recurrente por 5 (cinco) días. La providencia respectiva debe notificarse por cédula.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo y no habiéndose ofrecido prueba, el tribunal debe pronunciarse en el plazo de 10 días. Si se ha ofrecido prueba, el tribunal fija un plazo no mayor de 10 días para su producción. Una vez producida, debe pronunciarse en el plazo de 10 días.

En caso de quedar firme la resolución que declara procedentes las excepciones previas, el tribunal procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 286.

Art. 553. Prueba. Cuando la prueba ofrecida no consista en las constancias del expediente, el tribunal acuerda un plazo común para producirla, que no puede exceder el término de 20 días, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deban diligenciarse.

El tribunal puede, por resolución fundada, desestimar la prueba que resulte manifiestamente inadmisibile, meramente dilatoria o carente de utilidad. Se aplican supletoriamente las normas del Título X.

Art. 554.- Sentencia. Si las cuestiones debatidas fueran de puro derecho o se sustenten exclusivamente en constancias del expediente, o no se hubiese ofrecido prueba, el tribunal pronuncia sentencia dentro de 30 días de contestado el traslado previsto en el artículo 469 o, en su caso, se computa desde el vencimiento del plazo para contestar.

Si se hubiera producido prueba y no se hallare ninguna pendiente o hubiese vencido el plazo para su producción, o cumplidas las medidas para mejor proveer que pueda haber dispuesto el tribunal, se llama a autos para sentencia, que debe dictarse en el plazo de 60 días.

MODIFICACIONES A LA LEY 7

Artículo 25: Sustituyese el art. 8 de la Ley N° 7 por el siguiente:

Artículo 8 – Competencia. Los Tribunales, Jueces y Juezas son competentes en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires según los límites que declara el art. 8 de la Constitución de la Ciudad y en las materias que les atribuyen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y la presente ley.

Artículo 8. 2. Declaración de incompetencia. Toda demanda debe interponerse ante juez competente. Si de su contenido resulte que el juez ante quien se deduce no es competente, éste deberá inhibirse de oficio.

Consentida o ejecutoriada esta resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente.

Artículo 8. 3. Reglas especiales. A falta de disposiciones especiales, es juez competente:

En los incidentes, tercerías, solicitudes de beneficio de litigar sin gastos, medidas preliminares, medidas precautorias, cumplimiento de conciliaciones y transacciones concertadas en juicio, ejecuciones de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en juicio, y, en general, en todo proceso accesorio, el juez que intervino en el proceso principal.

En el juicio ordinario promovido como consecuencia del ejecutivo, el juez que entendió en éste.

En el pedido de determinación de la responsabilidad derivada del exceso o abuso de derecho en la traba de medidas cautelares, el juez que las dispuso. Si la medida hubiese sido ordenada por un magistrado incompetente, será competente para conocer en este proceso aquél juez cuya competencia hubiese sido establecida en forma definitiva.

Artículo 8. 4. Cuestiones de competencia. Procedencia. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procede la inhibitoria. La elección de una de estas vías impide la utilización de la otra.

En ambos supuestos, la cuestión sólo puede promoverse antes de que la competencia impugnada sea consentida.

A los fines previstos en este artículo, se entiende que los órganos judiciales con sede en la Capital Federal, integran una circunscripción distinta del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8. 5. Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria se sustancia como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remite la causa al juez tenido por competente.

La inhibitoria puede plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda, siempre que aquél trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Artículo 8. 6. Planteamiento y decisión de la inhibitoria. Entablada la inhibitoria, si el juez se declara competente libra oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicita, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda.

La resolución sólo es apelable si el juez ante quien se deduce la inhibitoria se declara incompetente.

Artículo 8. 7. Trámite de la inhibitoria ante el juez requerido. Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronuncia aceptando o no la inhibición. Su resolución sólo es apelable en el primer caso. Una vez consentida o ejecutoriada, remite la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a estar a derecho.

Si mantuviese su competencia envía las actuaciones, sin otra sustanciación, al tribunal competente para dirimir la contienda, y lo comunica sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas.

Artículo 8. 8. Trámite de la inhibitoria ante el tribunal competente para dirimir la contienda. Dentro de los cinco días de haber recibido las actuaciones de ambos jueces, el Tribunal Superior resuelve la contienda sin más sustanciación, y las devuelve al magistrado que declare competente informando al otro por oficio o exhorto.

Si el juez que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro del plazo de diez (10) días al Tribunal Superior, éste lo intima para que lo haga en un plazo de cinco (5) días bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión.

Artículo 8.9. Suspensión de los procedimientos. Durante la sustanciación de la contienda, ambos jueces suspenden los procedimientos sobre la cuestión principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiera derivar un perjuicio irreparable.

Artículo 8. 10. Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de suscitarse una contienda negativa, o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo sobre un mismo litigio, cualquiera de ellos puede plantear la cuestión, conforme el procedimiento establecido en los arts. 8.6. a 8.9.

Artículo 26: De forma.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Se pone a consideración de los Sres. Legisladores el presente proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la ley N° 189, que sancionara el Código Contencioso Administrativo y Tributario.

El criterio seguido en la materia no ha sido precisamente el de una modificación a fondo del mismo, sino que se ha limitado -por el momento- a hacer las imprescindibles que crean confusión en el interprete en forma cotidiana. Además se han agregado reglas faltantes e imprescindibles para el funcionamiento de la competencia contencioso administrativa.

De los siguientes ítems surgen claros cuáles son los cambios que se considera necesario introducir con una breve exposición de fundamentos.

En materia de solve et repete se introduce una modificación técnica sin cambiar el concepto que hace más claro el texto.

Se propone que, en caso de imponerse sanciones conminatorias a una autoridad administrativa, la responsabilidad subsidiaria del sujeto de derecho estatal sólo pueda hacerse efectiva si oportunamente se le hizo conocer el apercibimiento. Ello encuentra su justificación en la necesidad de garantizar el derecho de defensa de la sancionada, teniendo en cuenta además que, por tratarse de materia sancionatoria, resultan aplicables en estos casos los principios y garantías del derecho penal sustantivo.

A fin de alivianar la carga de tareas de los magistrados, se propone ampliar las facultades actuales de los secretarios, y prosecretarios administrativos, incluyendo las que prevén los artículos 38, 38 bis y ter. del CPCCN y que actualmente no se encuentran contempladas en el código local. Además, se mejora la redacción, incluyendo en un solo precepto ambos supuestos de revocatoria impropia –contra los actos del secretario y los del prosecretario administrativo-.

Consideramos que respecto del alegato resulta conveniente notificar esta providencia por cédula, sobre todo si se tiene en cuenta que los letrados retiran el expediente por orden (primero el actor y después el demandado). Dicha notificación permitirá conocer fehacientemente cuando se ha vencido el término que tiene el accionante para presentar su alegato y cuando comienza a correr el plazo para el accionado. A diferencia del CPCCN se deja expresamente establecido que la providencia que dispone que la causa está para alegar, deberá especificar el orden en que los letrados de las partes retirarán el expediente.

La declaración de inconstitucionalidad de las normas debe hacerse en el marco de un caso judicial. De manera que deben excluirse las declaraciones abstractas y, además, la decisión judicial debe guardar relación directa con el objeto de debate en el proceso. Así lo ha entendido en un fallo reciente la Corte Suprema al afirmar que “no puede verse en la admisión de esa facultad la creación de un desequilibrio de poderes a favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay.” El Tribunal también ha dicho que no se opone a la declaración de oficio “la presunción de validez de los actos administrativos, o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando contrarían una norma de jerarquía superior, lo que ocurre en las leyes que se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso.” (Mill de Pereyra c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contencioso administrativa, del 27 de setiembre de 2001).

Con relación a las declaraciones abstractas ha dicho la Corte, en el precedente antes citado, que ello “no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del artículo 20 de la ley 27”.

Sin embargo la Corte ha dicho que en tales casos la declaración de inconstitucionalidad “sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionalmente comprometidas en la causa.”

El criterio que se propone incorporar al Código concuerda con lo expresado por el Tribunal en el precedente citado.

Se propone incorporar expresamente el instituto de la contracautela, a efectos de respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso y asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que le ocasione la medida si ha sido trabada sin razón. Al respecto cabe señalar que si bien el CCAyT en su redacción actual no contempla expresamente este requisito, él se desprende de todos modos de la propia naturaleza de estas medidas, y que, por otra parte, el artículo 207 inc. 4º del CCAyT regula un caso particular de aplicación de la contracautela, y también se refiere a ella el artículo 6, segundo párrafo, de la ley 7, de todo lo cual la jurisprudencia ha inferido la procedencia de su fijación, en general, en materia de medidas cautelares.

La redacción actual del artículo 189 resulta confusa. En primer lugar, no surge del texto de la norma si los presupuestos enumerados para la procedencia de la medida deben presentarse en forma conjunta o es suficiente con la alegación alguno de ellos. Asimismo, los requisitos que la norma actual exige no se adecuan a la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de medidas cautelares, que ha admitido su procedencia contra el Estado cuando existe verosimilitud en el derecho y peligro en la demora (CSJN, “Albornoz, Evaristo I. c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación”, ED 113-477; “Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés c/provincia de Buenos aires y otra s/acción declarativa”, sentencia del 21/05/87, “Rossi Cibils, Miguel A. y otro”, LL 1993-B, 333; “Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- s/solicitud de medidas cautelares”, sentencia del 27/07/91, “Antonio Gonzalez S.A. c/provincia de Mendoza s/inconstitucionalidad”, sentencia del 9/12/93; “Irribarren Casiano R c/provincia de Santa Fé s/acción declarativa”, LL 1993-B, 264, entre muchos otros).

En consecuencia, la modificación que se propone define, en primer lugar, que en concordancia con lo decidido por la Corte en los precedentes citados todos los presupuestos enumerados en la norma deben acreditarse en forma concurrente para que la tutela cautelar resulte procedente.

En segundo lugar, en lo que respecta a los presupuestos en particular, se recepta el criterio jurisprudencial y doctrinario predominante en la materia exigiendo, básicamente, para la procedencia de la cautela la existencia de un derecho verosímil y un peligro cierto en la demora (CASSAGNE Juan Carlos, “Las medidas cautelares en el contencioso administrativo”, La Ley del 28 de mayo de 2001; GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, “Las medidas cautelares contra la Administración Nacional -principios jurisprudenciales-”, LL 1996-B, 1055; MAIRAL, Héctor, “Control Judicial de la Administración Pública”, T. II, pág. 799 y ss.; entre otros). Asimismo, se resuelve el debate doctrinario en torno a si resultan conceptos análogos o equiparables la verosimilitud del derecho y la existencia de una ilegalidad manifiesta al habilitarse, alternativamente, la alegación fundada de cualquiera de ambos extremos teniendo en cuenta que, en general, puede haber derecho verosímil sin que para ello sea necesario demostrar que el acto, hecho o contrato cuyos efectos se pretenden suspender evidencian una ilegitimidad de carácter manifiesto.

En lo que respecta al peligro en la demora, se establece que la amenaza de daño alegada debe ser, al mismo tiempo, grave e inminente. El requisito de gravedad del daño no requiere, a diferencia de lo que ha decidido la Corte Suprema para el ámbito federal, su irreparabilidad (CSJN, “Astilleros Alianza S.A. c/estado Nacional s/daños y perjuicios”, sentencia del 08/10/91 y “Arizu, Enrique e hijos c/provincia de Mendoza”, Fallos 307:2267), A efectos de flexibilizar su aplicación que podría, en ciertos casos, restringir indebidamente el alcance de la tutela cautelar cuando la gravedad del daño resulta de difícil prueba, se permite suplir su demostración acreditando, alternativamente, que la ejecución o cumplimiento del acto, hecho o contrato resulta susceptible de ocasionar un perjuicio mayor del que causaría su suspensión.

Con relación al tercer requisito, esto es, la inexistencia de un perjuicio para el interés público en caso de decretarse la suspensión, se trata de un requisito cuya valoración la Corte Suprema ha exigido expresamente como presupuesto de admisibilidad cuando se trata de medidas cautelares contra la Administración (CSJN, “Astilleros Alianza y “Arizu”, ya citados). Por tratarse de un hecho negativo, se consideró adecuado no exigir su demostración al solicitante, sino que será el magistrado quien, de acuerdo a las constancias del caso, determinará si la cautela que se le solicita resulta susceptible de afectar el interés público. A su vez, para obstar a la procedencia de la medida el perjuicio que la suspensión ocasione debe reunir, conjuntamente, los caracteres de gravedad e irreparabilidad.

Finalmente, se establece en sentido concordante que, para que resulte procedente la solicitud de levantamiento de la suspensión, la administración deberá acreditar los mismos extremos, es decir, daño grave e irreparable al interés público.

La regulación vigente de la revocatoria o reposición dispone este recurso resulta procedente –además de las providencias simples- contra las interlocutorias que no extinguen el proceso y ocasionan un perjuicio irreparable por la sentencia. En este aspecto el legislador local se apartó del sistema vigente en jurisdicción nacional. Sin embargo, la experiencia –recogida a partir de la aplicación de ambas normas en sus respectivos ámbitos- indica que la contenida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación favorece el orden y la celeridad procesal, toda vez que no resulta apropiado prever dos vías recursivas –reposición y apelación- respecto a todas las resoluciones interlocutorias que generan gravamen y no extinguen el proceso. Por otra parte, el dictado de éstas –precedido de la sustanciación- es fruto de la meditación pausada sobre los argumentos expuestos por los litigantes y, por lo tanto, es poco probable que el magistrado que los ha dictado revea su criterio al resolver la revocatoria. La apelación es suficiente resguardo para el derecho de las partes.

Se propone modificar el artículo 220 del CCAyT, aclarando que sólo corresponde conceder libremente la apelación cuando se trata de sentencias definitivas recaídas en procesos de conocimiento pleno. Se evita, de esta forma, el contrasentido que implicaría

seguir a rajatabla la redacción de la norma actual, que conduciría, v.g., a conceder libremente un recurso deducido contra la sentencia definitiva en el juicio de amparo, o la sentencia de trance y remate recaída en la ejecución fiscal.

Se incorporan normas sobre el recurso de inaplicabilidad de ley: La regulación actual de este recurso es claramente insuficiente, toda vez que no se han previsto numerosos aspectos del trámite. En consecuencia, se ha proyectado un régimen completo, tomando como modelo disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el ámbito nacional.

La incorporación efectuada al inciso 2 del artículo 260 intenta mantener una equivalencia entre los distintos tipos de procesos en lo que respecta a este instituto. Por ello, toda vez que los juicios ejecutivos, cualquiera sea su especie, se caracterizan por su celeridad, el plazo de seis (6) meses resulta excesivo. De ahí la propuesta de reducirlo a tres (3). En el caso de los incidentes, el argumento es el mismo que para las ejecuciones, con excepción del incidente de caducidad. En este último caso, el término de un mes concuerda con el tipo de medida que se pide. Tiende a evitar que mediante maniobras dilatorias, el proceso se encuentre paralizado, ya que como se sabe el incidente de caducidad tiene efecto suspensivo sobre el proceso. Respecto del inciso 3, se sugiere tratarlo en forma separada por cuestiones metodológicas.

Como es sabido, la acción declarativa de certeza constituye un medio procesal apto para obtener un pronunciamiento judicial que despeje interrogantes jurídicos que causen agravios. Es también un medio idóneo para el planteo de inconstitucionalidad.

Dicha aseveración es la consecuencia de un proceso de evolución jurisprudencial que, en la especie, principalmente ha promovido la C.S.J.N. y que en la mayor parte de los Códigos que la trata, se reglamenta su funcionamiento. Ello es lo que se hace en esta oportunidad dado que nuestro Código solamente hacía una mención a la misma en su art. 277 sin reglamentar el procedimiento.

La redacción actual del art. 390 ofrece muchas dificultades en el cómputo del plazo para alegar. Para evitar estos inconvenientes se propone una redacción que incluye dos supuestos de notificación personal o por cédula y se aclara con precisión los momentos en que comienza el plazo para cada parte. Asimismo, se incluyen normas contenidas en el rito nacional que han sido omitidas en la esfera local. Así, se prevén expresamente los efectos del llamado de autos a sentencia, se establece que todas las medidas para mejor proveer deben ser ordenadas en un solo acto, y se prevén las formalidades de la notificación de la sentencia, que debe practicarse de oficio. Se trata de una cuestión trascendente, toda vez que se relaciona estrechamente con el derecho de defensa de los litigantes.

Hasta la fecha se aplicó el art. 269 (requisitos de la demanda), por analogía, a los títulos ejecutivos en virtud de lo dispuesto en el art. 449 del CCAyT. Ello dio lugar a que, en ausencia de una mención precisa y completa del demandado en dichos instrumentos, previa intimación (art. 270), los jueces de primera instancia rechazaran “in limine” la acción incoada (art. 271). La Cámara de Apelaciones resolvió que bastaba con la identificación del demandado de acuerdo con las circunstancias que el actor suministre a su respecto, para que no fuera necesario intimar al actor a subsanar defectos de la demanda y, por ende, en tales casos, no procede el rechazo “in limine”. La incorporación de este párrafo al presente artículo evitará la remisión al art. 269, inc. 2, dejando aclarado que es idóneo el título que contiene el nombre o los datos suficientes que permitan individualizar al accionado.

Se incorporan al Código el Procedimiento de Juicio Ejecutivo con normas especiales para la ejecución prendaria y la ejecución hipotecaria. Se han seguido los lineamientos del Código Procesal que en la actualidad rige en la Justicia Ordinaria de la Ciudad. Asimismo, se hacen las correspondientes aclaraciones y remisiones para que quede en claro que la Ciudad no puede ser demandada por la vía ejecutiva.

La regulación vigente en esta materia ha merecido fundadas objeciones con sustento constitucional –privación de la defensa- toda vez que no prevé el traslado de la demanda. Por lo tanto, se ha proyectado un régimen que asegura el derecho de defensa de ambas partes. A tal efecto, se prevé un proceso que, por un lado, preserva el derecho de audiencia y prueba de la parte accionada y, por el otro, es de conocimiento breve y acotado, con facultades probatorias y recursivas limitadas, acordes a la naturaleza del juicio. Se establecen los recaudos que debe cumplir la notificación del traslado de la demanda y el alcance de la sentencia y, además, se prevé la posibilidad de obtener la entrega inmediata del inmueble en el supuesto de la acción contra intrusos.

Si bien existen diversas leyes que establecen o establecieron recursos directos ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario (vgr. artículo 21 de la Ley 210 –Ente Único Regulador de los Servicios Públicos-, artículo 34 de la ley 466 –Consejo Profesional de Ciencias Económicas- y artículo 115 del Código Fiscal - t.o. 2000-) éstas no siempre regulan, en forma acabada, el trámite que los mismos habrán de seguir en la instancia jurisdiccional. Esta carencia de reglamentación expresa ha dado lugar a vacíos normativos e imprecisiones, que debieron ser llenados por la actuación pretoriana de las dos salas del fuero, recurriendo, en general, a institutos de naturaleza análoga (Sala II, “Cielos del Sur S.A. c/GCBA –DGR- s/apelación judicial decisiones DGR”, sentencia del 14/12/2000).

Se propone, en consecuencia, establecer un procedimiento genérico al que deberán sujetarse, a falta de disposición específica, los referidos recursos. Se detallan en forma taxativa, asimismo, las normas referidas al procedimiento en primera instancia que resultan de aplicación.

Por último se incorporan modificaciones a la Ley 7. Teniendo en cuenta la carencia de normas sobre competencia en el CCAyT –con excepción de los artículos 1 y 2-, y teniendo en cuenta que la praxis jurídica cotidiana ha demostrado la necesidad de su inclusión, se considera conveniente adaptar las normas que sobre la materia contiene el CPCCN –la parte pertinente de sus Capítulos I y II- e incorporarlas a la ley 7 –a continuación de su artículo 8-.

Esta solución –modificación de la ley 7- se justifica por cuanto, si se incluyeran tales disposiciones en el CCAyT, sólo resultarían de aplicación al fuero contencioso. Sin embargo, las normas que disciplinan las cuestiones de competencia requieren, para ser plenamente operativas, resultar aplicables a todos los tribunales y fueros de la misma jurisdicción.

Ello así, pues la contienda puede involucrar a magistrados de distintos fueros dentro de la órbita local y, por lo tanto, para su resolución es preciso que la cuestión se encuentre regulada por normas que sean derecho positivo vigente respecto a todos los órganos implicados.

Por último, hacemos saber a los Sres. Legisladores que la presente modificación que proponemos ha sido desarrollada en el seno de la Comisión creada por el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad N° 1092/01, participando de la misma especialistas en la materia.

El presente proyecto fue elaborado por el suscripto, los Dres. Carlos Balbín, de la Cámara C.A. y T.de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Zamenfeld y Víctor Vannini de la Procuración General de la Ciudad.

Por los motivos antes expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.